

Efectos observados y efectos inesperados de la crisis global

Samuel Lichtensztejn Teszler*

Resumen

En el siguiente artículo se abordan tres tipos de efectos que han sido especialmente examinados en Estados Unidos: *a)* el crítico y negativo desempeño de la producción; *b)* el dramático crecimiento del desempleo, y *c)* la revisión de ciertos preceptos teóricos y el nuevo papel de la Reserva Federal (FED). Asimismo se analizan algunos efectos visibles que la crisis tendrá sobre América Latina.

Palabras clave: transnacionalización financiera, globalización, crisis financiera, retroceso económico, política económica

Abstract

In this article I discuss three types of effects that have been analyzed specially in the USA: *a)* the critical and negative output of production; *b)* the dramatic unemployment growth, and *c)* the revision of some theoretical precepts and the new role of the Federal Reserve (FED). I also analyze some of the visible effect the crisis will have in Latin America.

Key words: financial trans-nationalization, globalization, financial crisis, economic downturn, economic policy



IZTAPALAPA

Agua sobre lajas

* Investigador de tiempo completo, académico de carrera Titular "C" en la Universidad Veracruzana, máster y doctorado en Economía
samuelich@gmail.com

Introducción

Desatada la crisis financiera internacional y la debacle producida en el sistema financiero de Estados Unidos de América (EUA) –muchos estudios ubican su comienzo a fines de 2007–, los efectos que han sido observados en la dinámica económica de ese país en el curso de 2008 e inicios de 2009 son de diversa naturaleza y entidad. En el presente ensayo se manejan tres tipos de efectos que han sido especialmente examinados en EUA: *a*) el crítico y negativo desempeño de la producción; *b*) el dramático crecimiento del desempleo, y *c*) la revisión de ciertos preceptos teóricos y el nuevo papel de la Reserva Federal (FED). También se analizan algunos efectos visibles que la crisis tendrá sobre América Latina.

Efectos observados

Primero, a partir de las bancarrotas originadas en el sistema de hipotecas en EUA, las cuales arrastraron otros mercados en las economías desarrolladas, la atención estuvo puesta inicialmente en la incidencia de ese fenómeno en la marcha del sector construcciones. Más tarde, dada la enorme contracción manifestada en ese sector y sus vínculos con otros sectores productivos, el estudio de los efectos se centró en la evolución del consumo y su repercusión sobre la economía estadounidense en su conjunto.

Pese a los datos pesimistas que al inicio emergían de las grandes variables macroproductivas, el término que oficialmente se acuñaba era el de una desaceleración del crecimiento económico, evitando en todos los casos referirse al proceso como una recesión. Se señalaba que, para admitir formalmente la existencia de una recesión, era indispensable que el producto interno se redujera durante dos trimestres sucesivos. No obstante esa discutible inferencia estadística, la pregunta que en todos los casos flotaba en los ámbitos económicos y

financieros era si EUA no se encontraba ya en un estadio recesivo en su desarrollo productivo.

Avanzado el 2008, a la discusión anterior sobre el estado de la economía estadounidense se acopló la información plenamente confirmada de una recesión reconocida de las economías europea y japonesa. Por si fuera poco, se anunciaba que la economía china presentaba los primeros signos de desaceleración en sus altísimas tasas de crecimiento de los últimos años. Todo ello ponía al descubierto un efecto negativo global en la marcha del producto de los países desarrollados.

En el segundo semestre de 2008 se oficializaron las quiebras y rescates anunciados de los grandes bancos de inversión y bancos comerciales. En consecuencia, no hubo más reticencia para reconocer que EUA estaba ya en plena recesión en su actividad productiva. La tormenta financiera no sólo se abatía sobre los bancos y los fondos de inversión (en sus múltiples formas no reguladas), sino que la falta de créditos, entre otros aspectos, exponía a la gran industria automotriz a una inminente quiebra. No se hablaba únicamente de ayudar y rescatar grandes firmas financieras centenarias; también era necesario hacerlo con empresas que, como las automotrices, han sido símbolos del poderío económico de EUA.

A pesar de que la FED disminuía su tasa de interés de referencia hasta el grado de ubicarla prácticamente en cero por ciento, esa medida no lograba el objetivo de reanimar la economía y lo único que confirmaba era que la economía estadounidense se encontraba de modo inexorable en franca recesión. Por lo tanto, se acrecentaban los temores de una baja más pronunciada del consumo interno y las repercusiones que ello tendría para los países que exportaban a EUA.

En segundo lugar, ese proceso regresivo en materia financiera y productiva comenzó a golpear con fuerza el mercado de trabajo. Cuando las empresas de construcción y las entidades financieras –estas últimas, en su afán de bajar costos y así demostrar su voluntad de disminuir sus enormes pérdidas– comenzaron a despedir a miles de empleados, se pensó que el desempleo estaba asociado al impacto en esos dos sectores. Cuando la onda de despidos (más de 2.6 millones en 2008) involucró también a las empresas automotrices, a otros sectores industriales y al gran comercio, el concepto que comenzó a manejarse fue más allá del de recesión. En esas circunstancias, con alusiones cada vez más directas a la crisis de 1929, empezó a configurarse un proceso de depresión económica, en el cual se agudizan, al mismo tiempo, los problemas productivos y de desempleo. El número de subsidios a los desempleados se elevaba, pronosticando tasas de desempleo en EUA cercanas a diez por ciento en 2009.

Finalmente, cabe reconocer que ese retroceso económico y el caos financiero en EUA han determinado la caída de ciertos preceptos de la teoría económica oficial

y algunos de sus principios institucionales. No se profundizará, en este caso, en el fuerte intervencionismo económico –tildado por muchos como un neokeynesianismo– que ha caracterizado las decisiones del gobierno, contrastando con el aparente liberalismo que impregnaba sus orientaciones en el pasado. Vale decir, una suerte de revalorización del papel estatal *vis a vis* el fundamentalismo basado en el supuesto de que las fuerzas del mercado resolvían por sí mismas los problemas económicos. En cambio, se hará referencia, por un lado, a la nueva lectura teórica que cabe hacer en torno a los límites que la crisis actual ha impuesto a ciertas posiciones adoptadas respecto a los procesos de globalización y la transnacionalización; y, por otro lado, a la transformación tanto de los objetivos de la FED como de su grado de autonomía frente al gobierno.

A medida que los procesos de transnacionalización financiera y económica fueron avanzando desde la década de los sesenta del siglo XX, se fue aceptando la posición que confería a las grandes empresas a escala internacional una imagen de omnipotencia y de inmunidad creciente frente a las regulaciones y controles estatales. En favor de esta tesis abonaban diversos factores: *a*) la gravitación de sus enormes recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros, que les permite controlar un gran porcentaje de la producción, el comercio y las finanzas mundiales; *b*) sus estrategias de valorización global que las dota de una gran concentración y coherencia de sus decisiones, lo que favorece su capacidad de movilizar recursos y la posibilidad de diferenciar sus políticas en los diversos países donde radican; *c*) la ampliación de los espacios y los flujos económicos propios a través de las relaciones intrafirmas, y *d*) su aptitud para inducir corrientes político-ideológicas, mediante su dominio de los medios de comunicación y la influencia que ejercen sobre los distintos organismos internacionales. En fin, la realidad y la exaltación de esos poderes fue conformando un pensamiento dominante que se sintetizó en el concepto de la *globalización*, entendida como un macroproceso que sobrepasa las fronteras y las soberanías nacionales y, por lo tanto, erosiona los poderes de los Estados y sus radios de maniobra.

Aun reconociendo que la transnacionalización del capital y la globalización económica tienden a desbordar lo nacional, también debe admitirse que lo contienen y redefinen, sobre todo en lo que atañe al papel del Estado. En el plano de la política económica, la globalización tiende históricamente a concordar con un pensamiento neoliberal que postula otorgar plena libertad al funcionamiento de los mercados y a fijar mínimas regulaciones públicas de los mismos. Sin embargo, en los álgidos momentos de una crisis, cuando estallan fuertes contradicciones y situaciones conflictivas en el ámbito social, esa política económica exige corregirse. En tales circunstancias, como las que se viven actualmente en

EUA y en los principales países de la Unión Europea, las poderosas empresas transnacionales (como las bancarias y automotrices) se refugian en sus países de origen y buscan cubrir sus pérdidas, sus actividades especulativas o su falta de competitividad, reclamando con renovados fervores nacionalistas el apoyo financiero de sus Estados. Sin duda, hay repercusiones globales que hacen al sistema capitalista en su conjunto, pero la asunción de sus efectos concretos se realiza mediante el reforzamiento de las políticas económicas nacionales de apoyo a las grandes compañías oligopólicas, cuyos costos se descargan sobre la mayoría de los ciudadanos en detrimento de sus ingresos, sus ahorros o sus empleos.

En cuanto a sus objetivos, la FED (el Banco Central estadounidense) siempre fue un organismo atento fundamentalmente a evitar presiones inflacionarias en la economía. Al respecto, ha utilizado con frecuencia las alzas en su tasa de interés para enviar señales a los bancos, lo cual llevase a éstos a limitar, en última instancia, sus posibilidades de conceder créditos. De esa manera, se pretendía actuar monetariamente sobre la inflación por la vía de la demanda. Dígase de paso que esa forma de actuar afecta poco aquella inflación que se origina por la vía de la oferta, que, entre otros factores, está ligada a problemas de costos y no a la especulación, como la vivida en 2008 en materia energética y alimentaria.

Ahora bien, ante un panorama claramente recesivo, la FED, pero también los bancos centrales de Europa y de otros países desarrollados, optó por tratar de incentivar el crédito y la demanda mediante una tasa de interés casi nula y con el apoyo a los planes de rescate financiero de grandes bancos y empresas comprometidas. Por cierto, cabe destacar que la FED, empujada por la crítica situación, ha pasado a adoptar el papel, poco común para ella, de reactivador de la economía estadounidense, y ha dejado de asumir su clásico rol antiinflacionario. Conviene señalar, no obstante, que esa política de reactivación ha tenido poco éxito en el corto plazo dado el descenso pronunciado del nivel de la demanda interna (más dominada por los factores de desempleo que por el acceso al crédito) y la persistencia en la inestabilidad de su sistema financiero.

En materia institucional, merece subrayarse que la FED, organismo que se preciaba de la autonomía en sus decisiones, ha estado sometida en los últimos meses a las directivas del Tesoro del gobierno de EUA. La pregonada independencia de criterios para manejar la política monetaria –la misma que ha llevado a promover la autonomía de los bancos centrales en América Latina– prácticamente ha desaparecido ante la crisis. El gobierno estadounidense, con el beneplácito de la FED, ha asumido las riendas de los multimillonarios rescates financieros, por lo cual se han debido subordinar los tradicionales objetivos antiinflacionarios

a los objetivos anticrisis y anticíclicos definidos por el gobierno. En ese contexto debe incluirse la adopción –ya comentada– de una tasa de interés cero por parte de la FED.

Aunque el impacto de la crisis sobre América Latina está estrechamente vinculado con la onda recesiva que sacude a EUA, también lo está con la que viven la Unión Europea y Japón, así como con la desaceleración de países como China e India. La tendencia a la caída de los precios de los bienes básicos (agroindustriales, minerales y energéticos) ha sido una de las primeras consecuencias, dado el patrón de crecimiento latinoamericano basado fundamentalmente en la exportación de productos primarios o semielaborados. Tarde o temprano se sumarán al efecto-precio las repercusiones que la crisis tendrá sobre los volúmenes de las principales exportaciones latinoamericanas. Por cierto, el resultado final será tanto o más negativo cuanto más dependiente sea la economía de la demanda interna de EUA. En esa situación se encuentran sobre todo las economías venezolana, mexicana y centroamericana. Las dos últimas deberán sufrir además la disminución en las remesas y en el turismo originada en aquel país. No obstante, debido al carácter global de la crisis, aunque con cierto rezago, otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, con mercados de destino más diversificados, también se verán afectados tanto en lo referente a los ingresos de capitales externos como a sus exportaciones. En consecuencia, esos países verán deteriorados sus niveles de inversión, crecimiento y empleo.

Efectos inesperados

Según las revistas especializadas y las opiniones emitidas por los economistas, sobre todo de los países desarrollados, el análisis de los efectos de la crisis financiera y económica en 2009 se concentrará en seguir de cerca las intensas repercusiones de la recesión económica en el desempleo, y en los esfuerzos de recuperación por medio de los nuevos rescates multibillonarios en EUA y en países europeos. Las expectativas, previsiones y proyecciones que usualmente se realizan tienen como objetivo principal el comportamiento de esas variables.

Para los fines de este trabajo, se trata de establecer un enfoque alternativo dirigido a plantear ciertas hipótesis sobre aquellos fenómenos y efectos que aún no son percibidos y que no están siendo suficientemente considerados, pero que pueden caracterizar la coyuntura económica, social, política e institucional, en especial, de los países latinoamericanos.

En el campo económico, por ejemplo, las medidas proteccionistas que se adopten o puedan llegar a adoptarse pueden considerarse inesperadas porque seguramente serán soslayadas en virtud de que podrían dañar el espíritu, los acuerdos regionales y los tratados basados en el principio del libre comercio internacional.

Sin embargo, la depresión económica que caracterizó los años treinta del siglo XX, la cual frecuentemente sirve de referencia a la crisis actual, se distinguió por prácticas proteccionistas que los diversos países tomaron en defensa de la producción, la exportación y el empleo. No sólo se quebró el patrón oro y se dio lugar a depreciaciones cambiarias, sino que se levantaron barreras arancelarias, se utilizaron prácticas de *dumping* y *cartelización*, e incluso en algunos casos se llevaron a cabo acuerdos comerciales de trueque y compensación bilateral de bienes y servicios.

Desde entonces, las estructuras, las políticas y la institucionalización comercial y financiera internacional han cambiado profundamente. No obstante, en lo cambiario no se ha logrado aún instaurar un sistema estable, por lo que los países pueden, mediante el sistema de flotación sucia –o sea, con intervención estatal–, incidir actualmente en el tipo de cambio para favorecer sus exportaciones o el ingreso de capitales financieros. En el terreno comercial, la realidad internacional no ha correspondido con una ideología librecambista. El fracaso de la Organización Mundial de Comercio en abatir las prácticas proteccionistas de los países desarrollados es una clara ilustración de ello. En el contexto de la crisis actual, no es de extrañar que aparezcan intentos de países subdesarrollados para utilizar barreras no arancelarias a efectos de proteger la producción, el consumo y los precios internos de determinados productos. De hecho ya hay indicios de esa clase de comportamiento por parte de ciertos países que han procurado impedir o limitar la exportación de ciertos productos (arroz en Asia y carne en Argentina) con vistas a abastecer el mercado interno y contener el alza de sus precios. En el mismo sentido, no deberá llamar la atención que, en un futuro inmediato, diversos gobiernos alienten una cultura orientada a fomentar la compra de productos nacionales para impulsar el empleo. A todo ello cabe agregar las recientes medidas brasileñas, luego parcialmente anuladas, en cuanto a imponer una licencia previa y obligatoria de importación a casi sesenta por ciento de sus compras en el exterior, con el propósito de limitar esas compras externas y así nivelar su balanza comercial, desequilibrada por la intensa caída de sus exportaciones con motivo de la crisis.

En cuestión de *cartelización*, se ha incrementado esta práctica comercial, ya que a la conocida en materia petrolera (Organización de Países Exportadores

de Petróleo, OPEP) se ha agregado recientemente la conformación del cartel del gas, realizada a iniciativa de Rusia y con el apoyo, entre otros países, de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Finalmente, en lo que atañe a los acuerdos regionales, éstos se verán afectados por la crisis y, de este modo, se profundizarán sus actuales contradicciones internas. Esto llevará inevitablemente a que los países tomen medidas o intenten tomarlas al margen o contra las normas regionales, lo cual se ha observado tanto en la Unión Europea (al no ponerse de acuerdo en un paquete de rescate común) como en el Mercado Común del Sur (Mercosur). También muy probablemente, en el corto plazo, los tratados de libre comercio, en especial los establecidos entre EUA y países latinoamericanos, serán objeto de revisión en su contenido y alcance.

De tal suerte, se anticipa que el proteccionismo –aun sin teorías que lo apoyen (contrario a lo que sucedió luego de la depresión de 1929)– reaparecerá como un disperso conjunto de prácticas económicas defensivas que deben detectarse y ser analizadas como tales en cuanto un componente de los efectos de la crisis actual.

En el ámbito social, lo que justifica que aún no existan efectos esperados de la crisis es, en buena parte, la creencia –o a veces el deseo– de que la crisis no llegará, en su clímax, a estallidos sociales no controlados. Las recientes expresiones del expresidente Zedillo, en el Foro de Davós, en torno a que el rescate bancario en México llevado a cabo durante su administración representó veinte por ciento del producto de ese país y fue mayor al presente rescate estadounidense, no son sólo una comparación cuantitativa de costos, sino también, implícitamente, una sobrevaloración de su conducción económica y una minimización de los costos sociales, lo que concuerda con una confianza a priori en la sustentabilidad social y política del país ante una crisis.

Por cierto, no existen hasta hoy situaciones extremas de conflictividad social que puedan atribuirse a la crisis reinante. Asimismo, el aumento del desempleo que se experimenta en los países desarrollados (en particular, EUA y España) no se ha reflejado con igual intensidad en la mayoría de los países latinoamericanos. El incremento del empleo ocurrido en algunos países de la región por el auge productivo en los últimos años y la emigración ha representado un colchón ante un generalizado fenómeno de desocupación. No obstante, ese colchón se reducirá a medida que la crisis golpee con más fuerza en el futuro inmediato, y que crezcan consigo las dificultades para conseguir empleo con su respectiva secuela sobre el nivel de pobreza. A todo ello cabe agregar los conflictos que puedan surgir en el ámbito de los empresarios, quienes con el argumento de evitar,

o más bien atenuar, los costos de la recesión, así como su falta de competitividad y rentabilidad, busquen medidas de apoyo gubernamentales.

Los factores sociales sensibles a la crisis y al efecto del desempleo no son comparables con otras experiencias vividas en el pasado. En efecto, por lo menos en América Latina, las generaciones jóvenes tuvieron, en su momento, la oportunidad de buscar en el exterior fuentes de trabajo mejor remuneradas. Este camino se ha visto enormemente limitado porque la crisis actual no es sólo interna, sino internacional. No son sólo los jóvenes con voluntad de emigrar los que ven restringida esa posibilidad; también los más calificados comienzan a encontrar dificultades para su inserción laboral tanto en su país como en el exterior. La sensibilidad social a un futuro incierto en materia ocupacional, ya presente en las cohortes maduras de la población, alcanza así a la generación joven educada.

En materia laboral, por su parte, ¿qué actitud de defensa o resistencia pueden adoptar trabajadores que, por ejemplo, deben afrontar el cierre, la quiebra, la menor actividad de las empresas, los paros técnicos o la transformación y disminución del personal, la creación de contratos temporales, la rotación de personal y el limitado radio de acción de los sindicatos? Una pregunta del mismo tenor se puede extender a los empresarios, sobre todo a los medianos y pequeños, cuando en razón de la crisis enfrentan problemas de falta de crédito, menores ventas y crecientes déficits en sus balances operativos. Por cierto, en esas circunstancias, y con un gasto público a la baja en términos reales y una menor demanda interna, las relaciones obrero-patronales tienden a tensarse y abrir paso a conflictos que afectan la marcha de la economía en su conjunto. Las futuras discusiones sobre reducción del personal, disminución de remuneraciones, acortamiento de las jornadas de trabajo u otras propuestas a considerar en su oportunidad cuentan con pocas posibilidades de llegar a rápidos acuerdos. En especial, la oposición a disminuir ingresos reales y empleo se observará con más fuerza, como ocurrió en el pasado, allí donde el corporativismo sindical es más fuerte, por ejemplo, en cuestión educativa, de salud, de transporte y, en general, en las empresas públicas.

Los gobiernos han estado atentos a la ocurrencia de esos problemas en el campo laboral en los últimos meses de 2008 y comienzos de 2009. Al respecto, han adoptado distintas medidas para mitigar sus efectos presentando planes "anticrisis" (los más notorios y ambiciosos son el de EUA, Chile, Brasil, Argentina, México y Perú). Estos planes buscan moderar los efectos negativos previsible que la crisis ya produce o que pueda producir sobre el mercado laboral, y sobre todo, promover actividades generadoras de empleo. Son planes con distintos objetivos pero que en materia de empleo apuntan en particular a aumentar las

inversiones en infraestructura con base en la hipótesis de que esto puede tener efectos positivos relevantes y más o menos inmediatos.

Sin embargo, estos planes anticrisis contienen ciertas debilidades que no les permiten desarticular los conflictos sociales y laborales que se ciernen. Por un lado, tienden a redistribuir el gasto público, pero éste no propende a aumentar en términos reales. Por otro, esos planes no consideran el importante y creciente sector informal, el cual no sólo no participa de las oportunidades que esos planes generan, sino que se verá incrementado por los desocupados excedentes, presionando así las condiciones de inseguridad urbana en un amplio sentido. Por su parte, las inversiones en infraestructura pueden atraer a muchas personas del sexo masculino y de baja formación educativa, pero no a mujeres ni a jóvenes con formación universitaria, que son quienes crecientemente alimentan el contingente de desempleados.

La insatisfacción acumulada por los problemas de empleo e ingresos que la crisis provoca no siempre se expresa ni explota como conflictos abiertos en el mercado laboral. Hay fracturas de la convivencia, la tolerancia y la ética social consagradas que la crisis ciertamente acentuará a raíz del crecimiento ya mencionado del sector informal urbano, la inseguridad y la incertidumbre ciudadanas ocasionadas por vivir en la pobreza o por el empobrecimiento de las clases medias (dada su falta de empleo y de ingresos y la desvalorización de sus ahorros). Esa conflictividad potencial se basa, asimismo, en los crecientes obstáculos para acceder a la educación, a la salud, a la vivienda y a otros bienes y servicios básicos, dificultades que contrastan cada vez más con las formas indisimuladas de la corrupción y la ostentación de la riqueza que exhiben minúsculos sectores de la sociedad. Esa frustración empuja a movimientos ciudadanos, en los niveles local, regional y nacional, a manifestar su disconformidad ante la creciente inseguridad, la falta de oportunidades de empleo y de servicios públicos, y el incumplimiento de las propuestas gubernamentales o su insuficiencia ante las situaciones críticas.

Frente a la crisis actual, no está en el espíritu de este trabajo anticipar o predecir qué movimientos y conflictos sociales sucederán ni con qué intensidad. Pero sí, afirmar que están dadas las condiciones para que situaciones explosivas surjan, se apaguen y reaparezcan por diferentes motivos y con más frecuencia en los países latinoamericanos –aunque también en los desarrollados.

Los efectos de la crisis financiera y económica en el plano político pudieron ser parcialmente observados en las últimas elecciones de EUA, cuando se les atribuyó un papel decisivo en el triunfo demócrata en los niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo. Empero, en América Latina no se contemplan efectos en ese

terreno porque se confía en la solidez de los sistemas políticos y en que la influencia del descontento y las protestas sociales que pueda ocasionar la crisis no afectará la gobernabilidad democrática prevaleciente.

A la fecha, no se han expuesto hipótesis sobre la continuidad o el cambio en el rumbo de los gobiernos que pudieran surgir de los efectos de la crisis. Quizás ello obedece a la fortaleza y legitimidad que se atribuyen a las estructuras democráticas de las que emanan los gobiernos actualmente en funciones, y a la solidez de los partidos que configuran mayoritariamente el espectro político y electoral que caracteriza a EUA, Europa Occidental y América Latina. En este último caso no existen –como sí ocurrió en la crisis de 2001 y 2002– países con amenazas reales o potenciales sobre su gobernabilidad (Argentina, Brasil y Uruguay) o con fractura y crisis de los partidos políticos tradicionales (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay). En ambos casos emergieron triunfantes diferentes gobiernos de izquierda o progresistas que se identifican como tales, entre otros atributos, por su rechazo a las políticas neoliberales llevadas a cabo en el pasado y que desembocaron en crisis económicas, sociales y políticas en esos mismos países.

No obstante, en América Latina existen futuros actos electorales en que se elegirá presidente y en los cuales, además, se arriesga a perder las mayorías parlamentarias de los partidos en el gobierno. Ésa es la situación de países como Uruguay (2009), Chile y Brasil (2010), y Argentina (2011). Las fuerzas políticas de izquierda o progresistas que gobiernan actualmente en esos países no sufren conmociones internas que evidencien una pérdida de predominio electoral. Por ejemplo, la alta popularidad de los presidentes Tabaré Vázquez y Luiz Inácio Lula Da Silva, en los casos uruguayo y brasileño, respectivamente, no hace pensar que esté muy erosionada por la crisis. Tampoco la fuerza de las coaliciones que constituyen la concertación chilena y el peronismo argentino se verá disminuida en el terreno electoral en sus respectivos países.

Según las encuestas, sin embargo, hay indicios de un relativo agotamiento de esos regímenes, lo que, sumado a los efectos de la crisis importada, incidirá sin duda en los futuros acontecimientos electorales. Tales indicios en los cuatro casos mencionados demuestran un leve crecimiento de la oposición de centro-derecha, que, ante la posibilidad de una segunda vuelta, puede llevar a coaliciones formales o incluso a lograr la investidura presidencial y hasta una mayoría parlamentaria.

Por el contrario, en Centroamérica, la elección presidencial de El Salvador en noviembre de 2009 augura un triunfo del Movimiento Nacional Farabundo

Martí de Liberación Nacional (FMLN), lo que acompañaría a las corrientes de izquierda que ya representa el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.

Si todo lo anterior sucede, aunque sea parcialmente, es posible que en el futuro se redefinan las posiciones y las alianzas del Cono Sur latinoamericano con el Cono Medio-Norte (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y El Salvador). No cabe desdeñar que esa redefinición puede estar atizada por la nueva administración estadounidense, interesada en prestar más atención a los factores y actores geopolíticos en América Latina.

En contraste con las posiciones asumidas por los bancos centrales de EUA y la Unión Europea en cuanto a bajar la tasa de interés y tratar de actuar como reactivadores, varios bancos centrales latinoamericanos se han resistido a seguir los pasos de sus instituciones pares en los países desarrollados. La ortodoxia monetaria demostrada y enseñada por estos últimos a lo largo de muchos años ha calado hondo en varios bancos centrales latinoamericanos. Más aún, éstos han defendido la autonomía de su quehacer y no han renunciado a cederla a las presiones de sus gobiernos, en un momento dado, interesados en facilitar el crédito a las empresas y no presionar tanto por el lado del crédito a la producción y a la demanda internas.

Es cierto que los bancos centrales de Chile, Brasil y México, por ejemplo, han llegado a disminuir sus tasas de interés de referencia a los bancos locales, pero lo han hecho todavía manteniendo altos niveles. Al mismo tiempo, Argentina se ha negado a adoptar una mínima rebaja; y el caso extremo lo representa Uruguay, donde esa tasa se ha elevado sustancialmente en los primeros días de 2009. Dichas actitudes deben entenderse en razón de que esos bancos centrales constituyen, hasta cierto punto, el último reducto del neoliberalismo en algunos países que, políticamente, sin embargo, renegaron de esa ideología. La ortodoxia monetaria que se señala ante esta crisis consiste en apoyar la estabilidad financiera en detrimento de cualquier otro objetivo, como el de reactivar la demanda interna o la producción. Todo ello a pesar de que las proyecciones apuntan a que la inflación en América Latina disminuirá debido a un menor consumo y a que los precios de alimentos y energéticos han sufrido descensos en el plano mundial. En el fondo, subyacen en esa posición la intención de no afectar el ingreso de capitales externos, o evitar la fuga de ahorros en moneda nacional a moneda extranjera, y, a la vez, la de detener las presiones devaluacionistas del tipo de cambio. Como conclusión cabe afirmar que esta posición resulta más afín a los intereses financieros que a los de orden productivo.